



URVIO, Revista Latinoamericana de

Estudios de Seguridad

ISSN: 1390-3691

revistaurvio@flacso.edu.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales

Ecuador

Ruiz Vásquez, Juan Carlos

Dos décadas de prevención en Bogotá: una lectura crítica

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, núm. 7, mayo, 2009, pp. 101

-109

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=552656558006>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org



Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Dos décadas de prevención en Bogotá: una lectura crítica

Two decades of prevention in Bogota: a critical review

■ Juan Carlos Ruiz Vásquez¹

Fecha de recepción: marzo 2009

Fecha de aceptación y versión final: abril 2009

Resumen

Este artículo busca desvirtuar la idea de que los programas preventivos de seguridad implementados desde hace dos décadas en Bogotá hicieron descender de manera importante las muertes violentas. La falta de evaluaciones científicas ha impedido establecer una relación directa y cabal entre estos programas de seguridad ciudadana y la disminución de las tasas de criminalidad. Algunos de estos planes, altamente mediatizados y publicitados por las autoridades locales, organismos multilaterales y algunos académicos, han partido de diagnósticos falsos y decisiones erróneas que cuestionan su real alcance y eficacia. El artículo hace un balance de los logros alcanzados por estos programas en Bogotá, en especial aquellos pocos que cuentan con estadísticas y cifras concretas.

Palabras clave: seguridad ciudadana, Bogotá, prevención, frentes locales de seguridad, Policía comunitaria.

Abstract

This article seeks to explode the idea according to which the preventive programs of security implemented during the last two decades in Bogota have contributed to significantly reduce the homicides. The lack of scientific evaluations has prevented from establishing a direct and complete causal relationship between these programs of citizen security and the decrease of the crime

¹ Polítólogo colombiano. Profesor principal de las facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Colombia. Actualmente adelanta un doctorado en Politics en la Universidad de Oxford (Reino Unido) donde estudia los temas de Policía y seguridad ciudadana. Obtuvo un Máster en Administración Pública en la École Nationale d'Administration (ENA) en Francia. También es Máster en Administración de Empresas por la Universidad Laval en Canadá y Máster en Ciencia Política por la Universidad de Los Andes en Bogotá. En la Universidad del Rosario participa en el Grupo de Investigación en Seguridad (GIS) con el estudio de los temas militares y policiales. Fue director de la Maestría en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra de Colombia y asesor del Ministerio de Defensa de su país. Ha sido profesor de planta de las universidades colombianas Rosario, Andes y Javeriana. En esta última se desempeñó como director del departamento de Ciencia Política. Ha sido catedrático de las universidades Nacional, Externado, Del Norte, Autónoma de Bucaramanga, Del Atlántico, Javeriana de Cali, ESAP, entre otras.

rate. Some of these plans, highly publicized by local authorities, multilateral organizations and some scholars, have retaken false diagnoses and wrong decisions that questions their real extent and efficiency. This article evaluates the achievements of these plans in Bogota especially those having a few statistics and concrete figures.

Keywords: citizen security, Bogota, prevention, local fronts of security, community policing.

El caso de Bogotá ha sido citado como un ejemplo exitoso de políticas públicas de seguridad ciudadana en la región. El descenso en muertes violentas de 74 homicidios por 100 mil habitantes en 1993 a 19 en 2007 ha provisto a las autoridades locales de argumentos para hacer una relación directa entre las medidas preventivas adoptadas en términos de controles sociales y policiales, convivencia y cultura ciudadana, y la disminución de la criminalidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han publicitado el Modelo Bogotá como una fórmula idónea para ser adaptado en otras ciudades de América Latina (Acero, 2005). Su Policía comunitaria ha sido reiteradamente citada como uno de los casos exitosos en la región (Frühling, 2004).

Este artículo busca desvirtuar esta idea señalando que si bien los programas de prevención de la ciudad han representado un avance con respecto al marasmo en la materia antes de la primera elección popular de los alcaldes en 1988, los pocos diagnósticos de la violencia urbana en Bogotá y la falta de evaluaciones científicas parecen desvirtuar la relación directa entre programas preventivos de seguridad ciudadana y el descenso de muertes violentas.

Este artículo se divide en tres partes. En la primera se hace un recuento de las políticas de prevención importadas por las diferentes administraciones de Bogotá y su efectividad. En la segunda parte se hace un análisis de los pocos programas sobre los cuales existen cifras concretas de desarrollo y expansión. Por último, se muestra cómo algunos de estos programas altamente mediatisados y publici-

tados, partieron de diagnósticos y decisiones erróneas que cuestionan su real grado de alcance.

Las políticas de prevención en Bogotá: ¿realidad o retórica?

En Bogotá no ha existido una verdadera política de seguridad ciudadana que se haya mantenido en el tiempo, basada en un diagnóstico exhaustivo y científico, involucrando a varios actores institucionales, gremiales y sociales en la llamada coproducción y corresponsabilidad de la seguridad ciudadana. Antes de que en Bogotá se eligiera al primer alcalde en 1988, los alcaldes nombrados o designados no se interesaban en el tema de la seguridad ciudadana (Londoño, 1993). Tras la desaparición de las Policias departamentales y municipales a partir de 1958, los mandatarios locales dejaron de tener injerencia en estos temas para honrar los acuerdos bipartidistas y evitar que la Policía se politizara nuevamente. La seguridad ciudadana fue considerada un problema eminentemente de la Policía (Ruiz Vásquez, 2009).

Bogotá ha carecido de una política integral. En el mejor de los casos se han lanzado programas, muchos de ellos efímeros, que han trasplantado ideas de otros países. En 1987 se crearon los Centros de Atención Inmediata (CAI), manifestaciones inspiradas de los Koban japoneses que inicialmente fueron concebidos para acercar la Policía al ciudadano y mejorar su imagen, aunque pronto acentuaron su carácter reactivo, enmarcados en una estrategia de “team policing” para atender llamadas de emergencia en tan solo tres minutos (Sherman, 1973). Esto sumado a un crecimiento desmedido en número, sin

contar con los recursos y el personal suficiente, llevaron a que el programa perdiera impulso y credibilidad (Llorente, 1997).

Posteriormente la administración del primer alcalde elegido popularmente, Andrés Pastrana (1988-1990), intentó copiar sin éxito los *neighbourhood watch* que habían hecho carrera en los Estados Unidos y Gran Bretaña. En Bogotá el programa se llamó del “buen vecino” para incentivar la asociación entre los habitantes del barrio y la denuncia de actividades sospechosas. Este programa, que no pasó de una campaña publicitaria, nunca logró afincarse y pronto desapareció.

En 1995, la administración Mockus (1995-1997 y 2001-2003) dio los primeros pasos para construir el primer programa de seguridad ciudadana con una estrategia de controles, convivencia y cultura ciudadana, creando las primeras oficinas y observatorios sobre el tema y manteniendo una excelente relación con el cuerpo de Policía de Bogotá (Martin y Ceballos, 2005). Se aduce que estos programas están en la base del descenso de las muertes violentas en la ciudad. Sin embargo, como se verá más adelante, nunca se ha establecido una relación directa entre estos programas y el descenso de los homicidios en la ciudad. Incluso todo parece indicar que fueron otras las causas de este descenso, que además no fue algo inusual en Colombia ya que otras grandes ciudades como Medellín y Cali tuvieron comportamientos similares.

A decir de algunos analistas de la seguridad en la ciudad, el alcalde Peñalosa (1998-2000) trajo de los Estados Unidos el modelo de las “ventanas rotas” y “tolerancia cero” (Llorente y Rivas, 2004; Sánchez y otros, 2003). Con base en una idea distorsionada de lo que representan estas metáforas, algunos académicos hicieron una relación simple entre los proyectos de renovación urbana de Peñalosa y las políticas de seguridad, a tal punto que hasta la instalación de bolardos fue considerada el epítome de la teoría de las “ventanas rotas” en Bogotá, cuando en esencia esta teoría señala que los desórdenes e incivilidades

llevan a mayores sentimientos de inseguridad y estos, a su vez, lanzan el mensaje inequívoco de que ese sector es vulnerable y propicio para delinquir impunemente, lo que eleva la criminalidad trayendo a su vez la decadencia del sector (Weisburd y Braga, 2006).

En 1998, la Policía de Bogotá adoptó el modelo de Policía comunitaria, inspirado en el de los Mozos de Escuadra de Barcelona, donde fueron a formarse varios jóvenes oficiales colombianos. Rápidamente el programa encontró resistencia en los mandos medios y altos de la institución, quienes vieron amenazadas sus prerrogativas operativas cuando los jóvenes tenientes quisieron adoptar los llamados “equipos de barrio” de Barcelona, en donde un grupo de Policías maneja con relativa autonomía las acciones a seguir en su sector (Ruiz Vásquez, 2004a; 2004b). Los buenos propósitos quedaron en procedimientos formales que nunca fueron implementados cabalmente. Pocos de los jóvenes formados en España siguieron vinculados con el programa por gracia de los trasladados recurrentes y los cambios propios de la institución.

Ciertamente en Bogotá nunca se ha implantado un modelo real de Policía comunitaria que haya significado una transformación de la estructura, el proceder y la cultura organizacional de la Policía. Tampoco fue creada una división con nuevas tareas, estrategias y funciones para asociarse con los ciudadanos. Esencialmente se organizó una división que siguió adelantando políticas de participación comunitaria que ya existían (Llorente, 2006). La nueva Policía comunitaria adoptó el programa de Frentes de Seguridad Local ya existente desde 1996 para que los vecinos de barrio se organizaran, instalaran alarmas y se asociaran por medio de sus números telefónicos para alertar en casos de actividades sospechosas en su barrio (Llorente y Rivas, 2001a). Igualmente la nueva división adoptó un programa anterior de escuelas de seguridad para formar a líderes y vecinos de barrio en la organización y la participación comunitaria alrededor de la seguridad en sus cuadras.

La nueva Policía comunitaria acometió aún tareas más tradicionales que no eran ajenas a las actividades que la Policía colombiana había adelantado por más de tres décadas como la atención a menores, ancianos, habitantes de la calle e invidentes, y la organización de actividades lúdicas para niños (Llorente, 2001b).

Las administraciones de los alcaldes Garzón (2004-2007) y Moreno (2008) no cambiaron diametralmente los programas que se venían implementando desde Mockus. Durante la administración del primero, como aporte original se intentaron copiar los Contratos Locales de Seguridad franceses (CLS), pero en vez de la suscripción de un compromiso entre entidades del Estado de todo género para mejorar ciertos entornos particulares como sucede en Europa, los llamados Pactos de Seguridad Ciudadana han tratado de generar acuerdos entre la Alcaldía y ciertos gremios y asociaciones de particulares como los taxistas o personas vulnerables como el colectivo de gays y lesbianas. En cuanto a la administración Moreno, sumergida por una demanda ciudadana cada vez mayor por la seguridad, se ha intentado establecer zonas de la ciudad en donde se concentran los delitos de alto impacto siguiendo el modelo de “hot spot policing” (Weisburd y Braga, 2006). Sin embargo, una vez detectados 34 puntos críticos de la ciudad, ningún programa se ha implementado además del aumento del patrullaje policial y una tardía intervención de control en discotecas y expendio de licores tras la muerte ampliamente difundida de un joven.

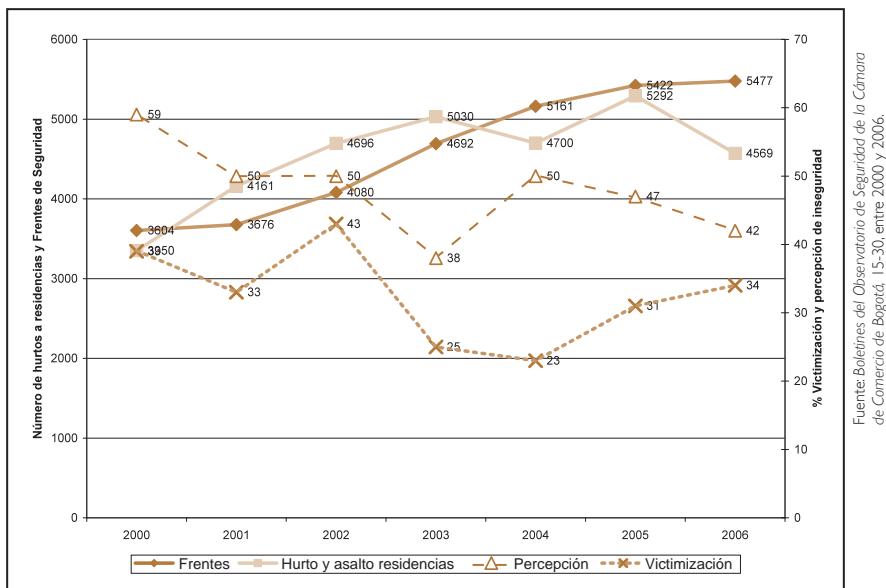
El declinamiento de los programas de prevención

Hoy por hoy prácticamente el único indicador disponible de resultados y eficiencia de seguridad ha sido el número de Frentes de Seguridad Local creados en Bogotá. Según la Policía, este bordea los 9.686 para 2006 y la Cámara de Comercio de Bogotá afirma que

los Frentes cubren el 15% de los habitantes y el 11% de las casas de la ciudad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007). La evaluación del modelo implantado de Policía comunitaria se ha reducido a estos Frentes en la práctica y no existe otra forma de medición. No obstante, estos Frentes que se han popularizado en otros países de América Latina como Plan de Barrio Seguro –Chile y República Dominicana–, o Cuadra Segura –Argentina– distan en gran medida de la Policía comunitaria por ejemplo de la ciudad de Chicago donde, en los encuentros entre una decena de uniformados y los residentes de un sector, se tratan tanto los asuntos nuevos de inseguridad que aquejan el barrio como aquellos a los que ya se les ha dado respuesta (Skogan, 1997; Brodeur, 2003 y 2005; Donzelot y Wyveldens, 2002).

En Bogotá, los Frentes de Seguridad en la mayoría de los casos no son en realidad reuniones cotidianas y regulares en donde Policía y comunidad actúan de manera mancomunada para resolver los problemas de inseguridad. En el fondo, estos Frentes son reuniones de orientación organizadas generalmente una sola vez para crear un sistema de reacción en caso de actos sospechosos en el sector. Dado el número de Frentes creados desde 1996, comparado con el pie de fuerza de policías comunitarios, resultaría factible organizar estas reuniones periódicas y repetidas en la medida en que los 1.049 policías comunitarios de Bogotá en 2006 podrían responder por 9.686 Frentes existentes, es decir que un uniformado tendría a cargo aproximadamente nueve Frentes, lo que le permitiría establecer reuniones periódicas una vez al mes con cada uno de ellos. No obstante, a la tasa de crecimiento de Frentes desde 2000 comparada con el estancamiento en la incorporación del número de policías comunitarios desde esa época, solo el programa Frentes de Seguridad sería insostenible en cinco años para ser atendido por el cuerpo policial actual si estos Frentes aumentaran anualmente en 9%, que es su crecimiento promedio desde 1996. Aunque Bogotá cuenta con un número

Gráfico 1. Creación de Frentes de Seguridad versus hurto a residencias, victimización y percepción de inseguridad en Bogotá, 2000-2006



Nota: **Victimización.** Porcentaje de personas víctimas de algún delito durante el último año según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Percepción de inseguridad. Porcentaje de personas que respondieron en la misma encuesta que la inseguridad había aumentado en el transcurso del último año.

importante de policías comunitarios, es probable que se dediquen diariamente a labores diferentes como la vigilancia y el control policial. De 6.300 policías con que cuenta la ciudad para vigilancia, solo hay 2.100 para cada turno, lo que hace que en la ciudad un policía en su turno deba cubrir realmente alrededor de 3.300 habitantes, cifra escalofriantemente deficitaria que se debe compensar con los policías comunitarios.

El cabildo de la ciudad realizó un debate sobre la efectividad de los Frentes y denunció que el 50% de ellos estaba inactivo. Por su parte, el alcalde Luis E. Garzón decidió frenar la creación de Frentes que se habían disparado durante las dos anteriores administraciones de la ciudad para evaluar y fortalecer los ya existentes. La Cámara de Comercio, en un estudio más sistemático, señaló que el 81% de los Frentes se encontraba activo. Muchos de ellos, sin embargo, acusaban problemas con las alarmas ya que en 30% de los casos no funcionaban y el llamado árbol telefónico entre

vecinos era inexistente en 39% de los Frentes (Cámara de Comercio de Bogotá, 2007).

Lo que salta a la vista en el gráfico 1 es que la creación de Frentes no ha tenido un efecto significativo en la reducción de hurto a residencias y los porcentajes de victimización. Aunque no se puede atribuir a estos Frentes ser la única variable independiente que tiene impacto en la inseguridad, el gráfico es elocuente en mostrar que estos Frentes, punta de lanza en la disuasión del robo en los barrios, no parecen haber tenido un efecto en la disminución de los hurtos y asaltos a residencias. Igualmente el número de personas víctimas de delitos, aunque se comporta irregularmente en el tiempo, tiene una tendencia a aumentar. Quizás los sentimientos de inseguridad, igualmente irregulares entre 2000 y 2006, parecen tender a la baja, lo que podría indicar que estos Frentes pueden incidir en factores subjetivos y psicológicos como el miedo al crimen. No obstante, dado que la encuesta en cuestión no establece si los encuestados pertenecen a

algún Frente, resulta imposible determinar su real impacto y peso frente a otras variables asociadas.

Diagnósticos erróneos y falta de evaluaciones

En Bogotá, la falta de diagnósticos serios ha limitado o desviado la concepción e implementación de políticas preventivas de seguridad. En 1995, el alcalde Antanas Mockus dio los primeros pasos hacia el primer programa de seguridad ciudadana, al crear el primer observatorio y darle mayor importancia al tema por medio de la Subsecretaría de Seguridad. Convencida la administración de que los homicidios en Bogotá se debían a riñas callejeras donde individuos "alicorados" terminaban matándose con armas de fuego por simples altercados personales, se decidió imponer un cierre temprano a la una de la mañana a establecimientos donde se expendía alcohol, lo que se conoció como la "hora zanahoria". A lo anterior se impuso una restricción al porte de armas de fuego los fines de semana, incluso para aquellos que tuviesen permiso legal. La Alcaldía partió de un supuesto no comprobado de que dos acciones consideradas por separado legales, como tomar licor y portar armas, amparadas por salvoconductos, cuando se conjugaban disparaban los delitos de alto impacto como el homicidio. Controlando ambos comportamientos se podía prevenir el delito. En esta misma lógica, la agresividad de los individuos y su dificultad para solucionar sus conflictos llevaban a que las diferencias degeneraran en muertes violentas (Acero, 2002).

No obstante, a decir de los tres estudios más reconocidos sobre las causas del crimen urbano en Colombia, las muertes violentas no estaban ligadas a riñas callejeras sino al crimen organizado y al asesinato instrumental (Rubio, 1998; Llorente y otros, 2001; Gaitán, 2001). El diagnóstico de la administración Mockus parecía erróneo a la luz de estos estudios. Sus políticas de cultura ciudadana serían inocuas si

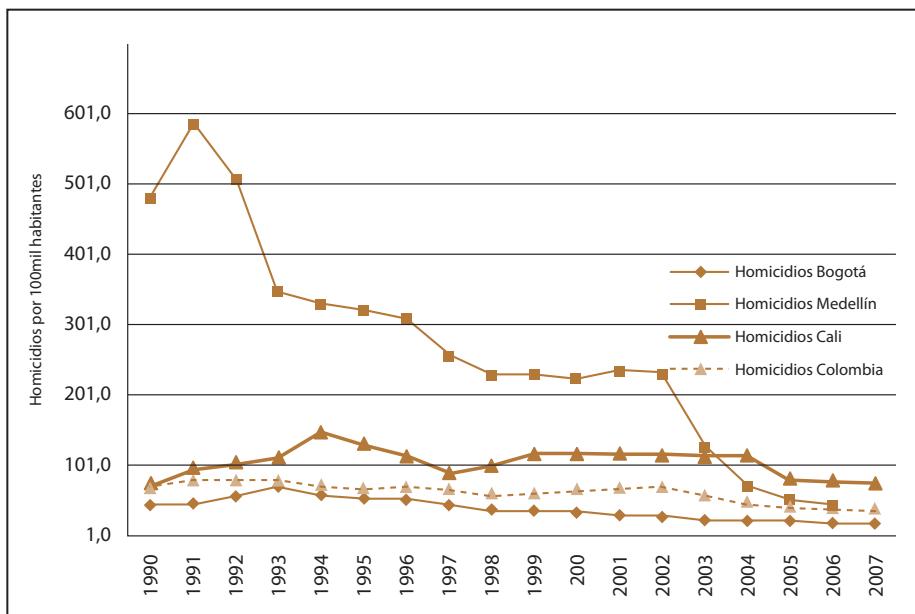
se tratará de disuadir criminales involucrados en *vendettas*, ajustes de cuentas y asaltos con violencia.

De hecho el descenso de homicidios comenzó dos años antes de que Mockus fuera alcalde, lo que desvirtúa parcialmente una relación directa entre sus medidas de convivencia social y el descenso de muertes. Incluso sus campañas de cultura ciudadana hubiesen tomado varios años para afincarse y dar resultados. No existen estudios que hayan demostrado de manera fáctica una relación entre las campañas de cultura ciudadana y un cambio de comportamiento en los ciudadanos. Todo se ha quedado en una percepción o retórica sin que se sepa a ciencia cierta qué factores han hecho desciender los homicidios en la ciudad. Un estudio más reciente se aventuraba en afirmar que los programas de la Alcaldía no habían tenido que ver con estos descensos en homicidios que parecen más bien ligados a comportamientos criminales del tráfico de drogas y de los carteles de todo el país. Sin embargo, esta demostración igualmente especulativa no estaba acompañada por correlaciones multivariables que permitieran afirmar definitivamente (Casas y González, 2005). El hecho contundente es que las tres ciudades más importantes de Colombia –Bogotá, Medellín y Cali– tuvieron descensos significativos de sus muertes violentas coincidencialmente alrededor de la misma época. Si Bogotá ha sido mostrada como un ejemplo exitoso, Medellín es un verdadero milagro en América Latina al pasar de la cifra escalofriante de 586 muertos por 100 mil habitantes en 1991 a 46 en 2006. Cali tuvo su pico más alto en 1994 con 149 muertos por 100 mil habitantes a 76 en 2007 (gráfico 2).

Comentarios finales

Aunque por primera vez las administraciones locales adoptaron planes concretos de seguridad ciudadana para Bogotá, los avances en la reducción de muertes violentas no parecen ser consecuencia directa de estos programas de prevención. Sin dudarlo han creado una institución que ha logrado consolidar su propia legitimidad y autoridad.

Gráfico 2. Homicidios por 100 mil habitantes en las tres ciudades principales de Colombia:
las cifras reales, 1990-2007



Fuente: Datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia.

Los cálculos son del autor con base en nuevos datos demográficos según censos ajustados y conciliados de 1985, 1993 y 2005. Para años intercensales, se hizo una aproximación de crecimiento geométrico simple.

tucionalidad y unos instrumentos para un tratamiento más riguroso del tema, pero varios de estos programas han sido efímeros, cambiantes y abandonados rápidamente. Aunque la tasa de muertes violentas en la ciudad sigue disminuyendo, el letargo en la materia de las dos últimas administraciones cuestiona la relación entre las medidas adoptadas o incluso su inacción y los delitos de alto impacto.

A pesar de la falta de evaluación que permite determinar el grado de éxito de estos programas, estos han sido ampliamente publicitados como modelos exitosos. La retórica utilizada resulta atractiva para otras autoridades locales del continente ya que se ajusta cabalmente a los discursos de participación y comunitarismo. A su vez, los organismos multilaterales se han interesado en los temas de convivencia y cultura ciudadana patrocinando formaciones en seguridad ciudadana con este componente e impulsando herramientas para incluirlas en todo plan de seguridad.

Más que una visión pesimista de estos programas preventivos, este es un llamado para que desde la academia y el mismo sector público se incluya evaluaciones de las políticas en la materia. Los académicos deben aportar diagnósticos científicos y fácticos para correlacionar las múltiples variables que inciden en la criminalidad. Por su parte, los gestores públicos deben contemplar en sus políticas un componente de evaluación que permita, cuando menos, determinar qué tan efectivos son estos programas. □

Bibliografía

- Acero, Hugo (2002). "Seguridad y convivencia en Bogotá. Logros y retos 1995-2001", en: Fernando Carrión (ed.). *Seguridad ciudadana. ¿Espejismo o realidad?* Quito: FLACSO, sede Ecuador: 451-474.
- Acero, Hugo (2005). "Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana", en: Pablo Casas (ed.). *Seguridad urbana y Policía en Colombia*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia: 167-233.
- Brodeur, Jean-Paul (2003). *Les visages de la Police. Pratiques et perceptions*, Montreal. Montreal: Les Presses de l'Université de Montréal.
- Brodeur, Jean-Paul (2005). "Trotsky in blue: the permanent policing reform". *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, XXXVIII, 2: 254-267.
- Brogden, Mike y Preeti Nijhar (2005). *Community policing. National and international models and approaches*. Devon: Willan Publishing.
- Cámara de Comercio de Bogotá (2007). "Frentes de seguridad local". *Taller regional de Policía comunitaria*. Bolivia: British Council.
- Casas, Pablo y Paola González. "Políticas de seguridad y reducción del homicidio en Bogotá: mito y realidad", en: Pablo Casas (ed.) (2005). *Seguridad urbana y Policía en Colombia*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia: 235-283.
- Cohen, Mark y Mauricio Rubio (2007). "Violence and crime in Latin America". Inter-American Development Bank, *solutions paper*.
- Crandall, Russel (2001). "Explicit narcotization: U.S. policy toward Colombia during Samper Administration". *Latin American Politics & Society*, XLIII, 3: 95-120.
- Donzelot, J. y A. Wyevekens (2002). "Community policing et restauration du lien social". *Les Cahiers de la Sécurité Intérieure*, 50: 43-72.
- Fischer, Benedikt (2001). "Community policing: some observations and reflections on its social, legal and democratic implications". *Policing, Security and Democracy: Special Aspects of Democratic Policing*. Huntsville: OIJC: 35-62.
- Frühling, Hugo (2003). "Policía comunitaria y reforma policial en América Latina. ¿Cuál es el impacto?" *Serie Documentos*. Santiago de Chile: Universidad de Chile / Instituto de Asuntos Públicos / Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), documento de trabajo.
- Frühling, Hugo (2004). "La Policía comunitaria en América Latina: un análisis basado en cuatro estudios de caso", en: Hugo Frühling (ed.). *Calles más seguras. Estudios de Policía comunitaria en América Latina*, capítulo 1. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Frühling, Hugo (2007). "The impact of international models of policing in Latin America: the case of community policing". *Police practice and research*, VIII, 2: 125-144.
- Gaitán, Fernando (2001). "Multicausalidad, impunidad y violencia: una visión alternativa". *Revista de Economía Institucional*, III, 5.
- Kelling, George (2003). "L'expérience de Kansas city sur la patrouille préventive". *Les Cahiers de la Sécurité Intérieure*. Hors-Série: 187-228.
- Londoño, Fabio (1993). "El primer siglo de la República", en: Álvaro Valencia Tovar (dir.). *Historia de la Fuerzas Militares-Policía*, 6. Bogotá: Planeta: 95-144.
- Llorente, María Victoria (2004). "La experiencia de Bogotá: contexto y balance", en: Hugo Frühling (ed.). *Calles más seguras. Estudios de Policía comunitaria en América Latina*. Washington: BID.
- Llorente, María Victoria y Ángela Rivas (2002). "La caída del crimen en Bogotá: una década de políticas de seguridad ciudadana", en: Lucía Dammert (ed.).

- Seguridad ciudadana. Experiencias y desafíos.* Red 14 y Comunidad Europea / Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Llorente, María Victoria y otros (2001a). “Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá”. Bogotá: Paz Pública, documento Cede 20 / Universidad de Los Andes, documento de trabajo.
- Llorente, María Victoria (2001b). “Programa de Policía comunitaria desarrollado en la ciudad de Bogotá. Contexto y balance de esta iniciativa”. Bogotá: Paz Pública, Universidad de Los Andes, documento de trabajo, 21.
- Llorente, María Victoria (1999). “Perfil de la Policía colombiana”, en: Malcolm Deas y María Victoria Llorente (eds.). *Reconocer la guerra para construir la paz.* Bogotá: Ediciones Uniandes / Cerec / Norma.
- Manning, Peter (2005). “Problem solving?” *Criminology & Public Policy*, IV, 2: 149-154.
- Martin, Gerard y Miguel Ceballos (2004). *Bogotá: anatomía de una transformación. Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003.* Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Rubio, Mauricio (1998). “Crimen con misterio. La calidad de la información sobre criminalidad y violencia en Colombia”. Bogotá: Paz Pública, documento CEDE / Universidad de Los Andes, documento de trabajo.
- Ruiz Vásquez, Juan Carlos (2009). “Colombian Police policy: Police and urban policing, 1991-2006”. Department of Politics and International Relations, University of Oxford, tesis doctoral.
- Ruiz Vásquez, Juan Carlos (2004a). “Reinventando la seguridad en Colombia: reformas fallidas y modernización inconclusa de la Policía colombiana”. *Ensayos Sobre Seguridad y Defensa*, 1: 57-90.
- Ruiz Vásquez, Juan Carlos (2004b). “Policía exitosa, Policía indolente. Nuevas ten- dencias en seguridad ciudadana”, en: Oswaldo Jarrín (comp.). *Política pública de seguridad ciudadana.* Quito: FLACSO / Fundación Esquel.
- Sánchez, Fabio y otros (2003). “¿Garrote o zanahoria? Factores asociados a la disminución de la violencia homicida y el crimen en Bogotá 1993-2002”. Bogotá: Documento CEDE 27, documento de trabajo.
- Sherman, Lawrence y otros (1973). *Team policing: seven case studies.* Washington: Police Foundation.
- Skogan, Wesley (1997). *Community policing, Chicago style.* Londres: Oxford University Press.
- Weisburd, David y Anthony Braga (2006). *Police innovation. Contrasting perspectives.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Ward, Heather (2006). “Police reform in Latin America: Brazil, Argentina, and Chile”, en: Joseph Tulchin and Meg Ruthenburg (eds.). *Toward a society under law. Citizens and their Police in Latin America*, capítulo 7. Washington: Woodrow Wilson Center Press.